

ECUADOR **Debate**

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editor: Hernán Ibarra Crespo
Asistente General: Margarita Guachamín

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.
© **ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR**
Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$ 45

ECUADOR: US\$ 15,50

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 15

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$ 5,50

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Tel: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

PuntoyMagenta

DIAGRAMACION

Martha Vinuesa

IMPRESION

Albazul Offset

ECUADOR DEBATE 79

Quito-Ecuador, Abril del 2010

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Diálogo sobre la coyuntura: La disputa por el modelo de desarrollo / 7-18

Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador

Luis Rosero / 19-30

Conflictividad socio-política: Noviembre 2009-Febrero 2010 / 31-46

TEMA CENTRAL

Perfil socio-metabólico de la Economía Ecuatoriana

María Cristina Vallejo / 47-60

Si eres tan progresista ¿por qué destruyes la naturaleza?

Neoextractivismo, izquierda y alternativas

Eduardo Gudynas / 61-82

Extracción, territorio e inequidades: el gas en el Chaco boliviano

Denise Humphreys Bebbington y *Anthony J. Bebbington* / 83-104

Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo:

los marcos de la discusión en la Argentina

Maristella Svampa y *Marian Sola Alvarez* / 105-126

Las actividades extractivas en Ecuador

Marcelo Varela / 127-150

DEBATE AGRARIO

Ruralidad y soberanía alimentaria en América Latina y el Caribe

Ramón Espinel / 151-162

ANÁLISIS

El déficit comunicacional de los partidos políticos en Ecuador
y su conversión en "partidocracia"

Consuelo Albornoz Tinajero / 163-180

Visiones de la Sociedad en la Bolivia Contemporánea:

La controversia entre dos grandes concepciones

H. C. F. Mansilla / 181-206

RESEÑAS

La reproducción de la dominación racial: las experiencias
de una familia indígena en Quito / 207-210

Las costumbres de los ecuatorianos / 211-214

Si eres tan progresista ¿Por qué destruyes la naturaleza?

Neoextractivismo, izquierda y alternativas

Eduardo Gudynas¹

Los gobiernos progresistas de América del Sur se encuentran ante el desafío de dar impulso al desarrollo económico y la justicia social. Ello implica tener en consideración también los impactos ambientales que producen las actividades de tipo extractivo. En las propuestas de los gobiernos y las izquierdas no ha existido una preocupación sustantiva y programática por el cuidado de la naturaleza. Las actuales contradicciones entre los estilos de desarrollo progresistas y la temática ambiental provienen de una débil reflexión que no ha incorporado seriamente la ecología para proponer alternativas de desarrollo.

En América del Sur se siguen acumulando los más diversos impactos ambientales, que van desde la contaminación a la deforestación, desde el deterioro de la calidad ambiental en las ciudades a la desaparición de especies nativas. Estas tendencias no han cambiado sustancialmente en los últimos años, con lo que el resultado neto es un creciente deterioro ambiental.

La llegada de los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda significó un recambio político comprometido con abandonar el reduccionismo de mercado y volcarse hacia otra estrategia de desarrollo. En algunos frentes se han dado avances sustanciales, como sus posturas

en política internacional y enérgicos programas de ataque a la pobreza, y de la misma manera se esperaban cambios en las políticas ambientales para detener ese deterioro creciente.

Sin embargo, en casi todos los países se han mantenido los énfasis en sectores como la minería e hidrocarburos, acentuándose un sendero extractivista que a su vez desencadena variados impactos sociales y ambientales. Se escuchan discursos con evocaciones verdes, pero la política ambiental es muy débil y se está convirtiendo en una de las principales áreas de disputa y controversia en el seno de la izquierda gobernante contemporánea.

1 Investigador principal en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo, Uruguay (egudynas@ambiental.net). El autor agradece a Mariela Buonomo, Soledad Ghione y Gerardo Honty por la lectura crítica del manuscrito.

En el presente artículo se examinan algunas facetas de estas tensiones. Se consideran las contradicciones políticas entre las expresiones de izquierda o progresistas, el nuevo extractivismo que cobijan y sus implicancias socioambientales. Enseguida se examinan algunos puntos sobresalientes en el debate político actual, por ejemplo el “socialismo del siglo XXI”, sopesándose si se incorpora o no la dimensión ambiental. Se describe el actual regreso a la vieja oposición entre economía y ecología, y advierte que el fortalecimiento de la política ambiental no es apenas colocar filtros de aire en chimeneas o plantas de tratamientos de efluentes, sino que implica una fuerte revisión en conceptos claves. Entre ellos, las ideas sobre la abundancia, las formas de valoración y la perspectiva antropocéntrica, necesitan ser revisadas en el seno del pensamiento progresista.

El progresismo y el anuncio de cambios

La nueva izquierda o progresismo en América del Sur es un conjunto heterogéneo de gobiernos, partidos políticos y coaliciones. Sus ejemplos notorios son los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Inacio Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay), Tabaré Vaz-

quez, y su sucesor José Mujica (Uruguay), Hugo Chávez (Venezuela), y la pasada administración de Michelle Bachelet (Chile).

Las similitudes y diferencias son el motivo de análisis de muchos autores (una buena introducción se puede encontrar en Saint-Upéry, 2008), pero más allá de ellas, todos se autodefinen o proclaman como representantes de la nueva izquierda sudamericana.² Su llegada al gobierno ha estado envuelta en distintos anuncios de cambios sustanciales, o incluso radicales. De esta manera, en Ecuador, Alianza País defiende una “revolución ciudadana”, desde Venezuela, Hugo Chávez promueve el “socialismo del siglo XXI”, e incluso en Uruguay, al tiempo de asumir la presidencia, Tabaré Vázquez anunciaba que “temblarían las raíces de los árboles”. Aunque el sentido de esas transformaciones cambió de un país a otro, y no será lo mismo, por ejemplo, la hiperinstitucionalización uruguaya que la vorágine social boliviana.

Más allá de las diferencias en esos planos, estos gobiernos coinciden en romper con el énfasis de origen neoliberal ensimismado con el mercado como escenario privilegiado de la política y la gestión³. Se identifican con los sectores populares y en algunos casos con aquellos que se encontraban más oprimidos

-
- 2 En el presente texto no se analizarán en detalle las diferencias entre los gobiernos de la nueva izquierda. También se apelará a la paciencia del lector en tanto los términos izquierda, progresismo, socialismo y otros, se usan con bastante libertad y en el sentido convencional bajo el cual aparecen en América del Sur. La caracterización de cada uno, sus superposiciones y diferencias, extenderían más allá de lo permitido el presente trabajo.
 - 3 Aunque en Chile estos y otros cambios descritos más adelante, han sido más medidos y pausados, en tanto la administración Bachelet mostró una continuidad con los anteriores gobiernos de la concertación por la Democracia.

(como pueden ser movimientos indígenas y campesinos en algunas regiones andinas). Existe un mayor protagonismo estatal, la ola de privatizaciones se detuvo y en algunos casos se volvieron a nacionalizar empresas que tiempo atrás fueron vendidas. No se oculta el problema de la pobreza, sino que se lo combate, incluyendo diversos planes gubernamentales de asistencia monetaria focalizada. Existe un intento de promover un cierto Estado de Bienestar, creándolo allí donde apenas se insinuaba, y en otros casos, fortaleciéndolo.

La política económica y productiva alcanzó reformas importantes en Venezuela pero en los demás países reviste muchos rasgos convencionales. Más allá de las declaraciones, se observan varias continuidades donde el desarrollo es entendido como crecimiento económico, y sus componentes centrales están en promover las exportaciones, especialmente de materias primas, y atraer inversiones. Este camino queda rápidamente inmerso en muchas contradicciones ambientales y sociales, por los impactos que desencadena.

Tolerando la destrucción de la Naturaleza

En todos los países bajo gobiernos progresistas se ha mantenido, e incluso reforzado, los sectores extractivos, que incluyen la minería, gas y petróleo, y los monocultivos de gran cobertura orientados a la exportación. Su participación en

las economías nacionales es muy alta; por ejemplo, los hidrocarburos casi representan el 90% de las exportaciones totales en Venezuela, y los minerales más del 60% en el caso chileno. Estos emprendimientos generan los más diversos impactos sociales y ambientales, que van desde desplazamientos poblacionales, afectaciones a la salud, hasta la deforestación o contaminación del agua. A su vez, esos efectos generan distintas protestas sociales, desde reclamos judiciales a bloqueos de rutas o paros cívicos.⁴

Frente a esta situación es necesario preguntarse por qué los gobiernos progresistas toleran estos impactos sociales y ambientales. ¿Cuáles son los mecanismos o las posturas que les permiten minimizarlos, ignorarlos o desatenderlos? Estas interrogantes tienen varias respuestas.

En muchos casos, se insiste en que los impactos sociales y ambientales de los emprendimientos extractivos son menores, se debate sobre los umbrales de impacto tolerables o sobre la efectividad del manejo de emisiones o efluentes. Esto se observa con mucha frecuencia por ejemplo en Chile, Brasil o Uruguay. Esta tendencia puede llevar a límites escandalosos, tal como se observa en Perú (bajo un gobierno conservador), en el caso de la ciudad de La Oroya, una de las urbes más contaminadas del planeta como consecuencia de la minería. A pesar de todo eso, el Ministerio de Salud no la incluye en su lista de sitios sensi-

4 Sobre los impactos sociales y ambientales del extractivismo en los países progresistas véase a Acosta, 2009 para Ecuador; Morales y Ribera Arismendi, 2008 para Bolivia; Svampa y Antonelli, 2009 en Argentina; y Gudynas, 2009b con ejemplos para varios países.

bles de contaminación y bajo vigilancia ambiental y sanitaria.⁵ Este tipo de problemas se repite en muchos sitios, y genera una situación donde las comunidades locales deben cargar con todo el esfuerzo y costo de demostrar que esos impactos ocurren, y tal como se ilustra en el ejemplo de arriba, deben convencer tanto a la opinión pública como al propio gobierno.

En otros casos, el Estado acentúa su centralismo y le basta con dejar de vigilar lo que sucede en los rincones más apartados del país. En tanto el extractivismo ahora avanza hacia sitios más remotos en sierras y selvas, aspira a pasar desapercibido. Ejemplos de este problema se ilustran con la pequeña minería informal de extracción de oro o con la deforestación en sitios apartados de la Amazonia. En el caso brasileño, el ministro del ambiente de Brasil, Carlos Minc afirmaba en febrero de 2010 que “por primera vez” la deforestación amazónica estaba “controlada” y que no se regresaría a los índices de destrucción del pasado. Su declaración se basaba en la caída de la deforestación a fines de 2009. Pero pocas semanas después, gracias al estudio de fotos satelitales que permiten un seguimiento incluso en los sitios más apartados, una organización ciudadana encontró que en realidad la tasa de pérdida de bosques creció un 22% entre agosto de 2009 y enero de 2010, en relación al año anterior (Hayashi et al., 2010). En este tema también persisten los problemas de corrupción, una aplicación defectuosa de la vigilan-

cia y las sanciones, y la debilidad de los juzgados para lidiar con los problemas ambientales.

En paralelo, en varios países existen presiones y acciones para flexibilizar la normativa ambiental, reducir sus requisitos, y ampliar las facilidades para la evaluación del impacto ambiental. Ese embate es intenso en el segundo mandato de Lula da Silva en Brasil, y llegó incluso a removerse a las autoridades ambientales que no firmaban los permisos ambientales grandes obras (como las represas en la Amazonia). Otro tanto sucede en Bolivia, donde el proyecto de una nueva ley en hidrocarburos remueve los mecanismos de consentimiento previo local para la explotación petrolera en tierras de comunidades campesinas o pueblos indígenas, junto a flexibilizar otros aspectos ambientales (como las salvaguardas para las áreas protegidas) (véase Villegas, 2010).

También se advierte que si bien la ley vigente en Bolivia es heredada desde los gobiernos neoliberales, a juicio de Villegas (2010), el nuevo proyecto del gobierno de Morales es peor. El analista predice un “enorme incremento en la extensión de las industrias extractivas en el territorio nacional”, y agrega que significa “que estamos ante un futuro de impactos y riesgos sin precedentes sobre todo el territorio nacional y la población”.

Bajo estas posturas, todos los gobiernos, incluidos los progresistas, junto a vastos sectores académicos, empresariales y del resto de la sociedad, comparten la visión de una América del Sur repleta

5 Resolución ministerial 094-2010/MINSA, 12 febrero 2010; reporte de Clima de Cambios, Pontificia Universidad Católica del Perú.

de riquezas ecológicas, con holgados márgenes para la ampliación de las actividades humanas. Se sostiene que son recursos que estarían lejos de agotarse, los ecosistemas locales poseerían enormes capacidades de amortiguación (un ejemplo típico: los ríos son tan grandes y caudalosos, que la contaminación se diluiría en ellos), y aquí no se repetirían los problemas ambientales de los países industrializados. Esta actitud se puede ejemplificar con la prédica venezolana de contar con las mas grandes reservas de hidrocarburos de América Latina, y su apresuramiento en utilizarlas, donde el debate de sus implicaciones ambientales se desvanece (véase a García Gaudilla, 2009).

En la misma línea se encuentran las metáforas sobre la riqueza que nos rodea y que necesariamente debe ser utilizada intensa y eficientemente. En el caso ecuatoriano, el presidente Rafael Correa repite las alusiones a “no ser mendigos sentados sobre un saco de oro”, donde sería una tontería o irresponsabilidad no aprovechar esa riqueza. Ha usado repetidamente esa imagen para fundamentar muy distintas cosas: la Ley de minería (enero 2009), justificar la explotación petrolera del ITT si no se obtenía una compensación internacional (febrero 2009), en presentar a la minería como fuente de recursos para atacar la pobreza (junio 2009), y como impulso decisivo al desarrollo (noviembre 2009).⁶

También se viene apelando a soluciones tecnológicas que se consideran eficientes y completas, con las cuales se reducirían o anularían los impactos ambientales. Estas incluyen nuevas tecnologías que, en varios casos pueden tener un gran valor, pero que de todas maneras no cambian el balance ambiental negativo. Algunas de ellas pecan de un gran optimismo, como los recientes apoyos del presidente Lula da Silva, y su ministro del ambiente, C. Minc a lo que denomina como “represas plataforma”: grandes represas hidroeléctricas en la Amazonia que serían construidas como si fueran “plataformas” marinas de explotación petrolera, aisladas en ese océano de selva tropicales, donde las personas y los insumos van y vienen con helicópteros⁷. Es evidente que esta propuesta es ciega a los efectos negativos del represamiento del río, los cambios en los ciclos hidrológicos o la desaparición de miles de hectáreas de bosque tropical bajo el lago de la represa. Pero a pesar de todas estas evidentes limitaciones, esta idea es presentada como si fuera una propuesta seria por sus defensores.

Otro flanco de tolerancia con los impactos sociales y ambientales se desenvuelve alrededor de procedimientos de publicidad y marketing, tales como la responsabilidad social empresarial (RSE), el uso de las certificaciones ISO de la serie 14 000, los códigos de conducta, etc. Este tipo de herramientas tienen al-

6 Basado respectivamente en *El Universo*, 16 enero 2009; agencia EFE 21 febrero 2009; Radio Cooperativa de Chile, 6 junio 2009; y agencia Reuters, 5 noviembre 2009.

7 Véase “Complejo Hidreléctrico do rio Tapajós”, por Telma Monteiro, 3 marzo 2010, en www.amazônia.org.br.

gunos valores, en especial como forma de obligar a las empresas a dar a conocer información, cumplir estándares de registro y evaluación de procesos, información al consumidor, etc. Pero el problema es que en muchos casos estos instrumentos se distorsionan y terminan siendo presentados como sinónimo de una excelente gestión ambiental, suplantando el papel de monitoreo y fiscalización del Estado, y la participación de las comunidades locales. En muchos casos las agencias gubernamentales aprovechan esas medidas para eludir intervenir en esos sectores, mientras que no son pocos los empresarios que las usan como meras medidas publicitarias.

Finalmente, otro flanco creciente de tolerancia a los impactos ambientales se encuentra en la ilusión de la mercantilización de los bienes y servicios ambientales. Bajo esta idea se asume que convirtiendo los recursos y funciones de los ecosistemas en bienes y servicios que se pueden transar en el mercado, se generarían recursos para invertirse en la protección ambiental. Esta estrategia tiene varios problemas, cuyo estudio en profundidad escapa al presente artículo, pero deben mencionarse un par de puntos vinculados con el extractivismo. El primero es que refuerza la idea de manejar a la Naturaleza como una canasta de recursos comercializables que se administra bajo criterios económicos. Por lo tanto, se sigue en un camino donde las decisiones se toman en base a la rentabilidad; los decisores se preguntan si obtendrán más dinero desde posibles tasas al uso de servicios ecológicos o desde la exportación de petróleo o minerales. El segundo, es que este tipo de instrumentos de gestión han tenido éxito

muy limitado, y no reemplazan a las políticas públicas.

El neo-extractivismo

Bajo los gobiernos de la nueva izquierda se han mantenido muchos de los problemas propios de las estrategias extractivistas, como se puede concluir a partir de varios de los ejemplos mencionados arriba. Los emprendimientos clásicos persisten, especialmente en minería e hidrocarburos, y en algunos casos se busca expandirlos (como sucede en Ecuador con la apuesta a la minería a gran escala).

La persistencia del extractivismo representa un cambio sustancial frente a la vieja izquierda, la cual siempre criticó a sectores como la minería y las petroleras, no sólo por sus impactos locales, sino por representar economías de enclave que no generaban beneficios sustanciales. Esa dependencia en exportar materias primas era vista como un estado de atraso, que debía ser superado.

Sin embargo, los gobiernos progresistas en los hechos se han encaminado a un nuevo extractivismo (Gudynas, 2009b). A diferencia de lo que ocurría en el pasado, por un lado hay una mayor presencia estatal, en algunos casos se aumentaron los tributos y regalías, y se busca una mejor regulación. Pero por otro lado, las empresas extranjeras reaparecen bajo otros modos de asociación, la dependencia de los mercados globales se acentúa y en algunos casos el propio Estado apoya o subvenciona a diferentes emprendimientos. Uno de los ejemplos más claros son los sucesivos apoyos del gobierno de Morales para explotar sus yacimientos de hierro.

Mientras que en el pasado se asociaba el extractivismo con condiciones de pobreza y marginación económica, ahora pasa a ser concebido como el motor del desarrollo y un aporte indispensable para financiar los programas de asistencia social. Distintos componentes del clásico pensamiento de izquierda son reajustados bajo esta nueva postura. Por ejemplo, en el caso de la reforma agraria, la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil recuerda que el gobierno de Lula da Silva abandonó los contenidos clásicos de esa reforma substituyéndola por una “regularización de la propiedad” y una gestión acoplada a la expansión de los agonegocios (de Oliveira, 2009). ¿Por qué se siguen esos pasos? Para ajustar el uso del territorio a las necesidades de la agroindustria exportadora.

En varios casos estas posturas se han llevado al extremo de postular casi un chantaje donde se dice que si se pone en riesgo este extractivismo, se perderían los planes sociales y las posibilidades de desarrollo. Las críticas al extractivismo se manejan como si fueran proclamas a favor de la pobreza. Por lo tanto, la explotación de la Naturaleza bajo las actuales formas sería inevitable, y lo que apenas puede hacerse es amortiguar sus impactos sociales y ambientales. Allí donde eso no es posible, los grupos locales se deberían “sacrificar” para asegurar un bien mayor para el resto del país. De esta manera, la construcción de

un Estado de bienestar del progresismo del siglo XXI parece que debería erigirse sobre estos sacrificios sociales y ambientales.

Hay varios ejemplos en este sentido, algunos citados arriba. A mediados de 2009, al sumarse las protestas de comunidades campesinas e indígenas al norte de La Paz (Bolivia), contrarias a la explotación petrolera, el presidente Evo Morales replicaba con disgusto: “¿de qué Bolivia va a vivir si algunas ONGs dicen Amazonía sin petróleo?”, agregando que “están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.⁸

Es importante desentrañar la lógica del rechazo de Morales, ya que no acepta detener la explotación petrolera en tanto la asume como indispensable para financiar sus paquetes de ayuda social. Siguiendo esa línea, considera a quienes reclaman estar bajo la manipulación de ONGs o intereses extranjeros, invocando así una idea muy difundida en todos nuestros países donde los problemas nacionales se deberían a causas externas y ajenas.

Este tipo de declaraciones se repite en todos los países progresistas, donde esos gobiernos defienden un estilo de desarrollo primarizado, que persigue el crecimiento económico por medio de

8 Agencia Boliviana de Informaciones, 10 Octubre 2009. El IDH es un fondo de asistencia económica obtenido directamente de la renta petrolera; los bonos J. Pinto, J. Azurduy y Renta Dignidad, son programas de asistencia social basados en transferencias económicas, en casi todos los casos condicionados. Esos programas son financiados por el tesoro boliviano, el impuesto a los hidrocarburos y aportes de la empresa estatal petrolera.

incrementos constantes en sus exportaciones y recepción de inversión extranjera. Por cierto que en ello el Estado juega otros papeles más activos, y la forma bajo la cual se distribuyen los excedentes tiene algunas diferencias. Pero más allá de eso, el punto es que se reorganiza el estilo de desarrollo nuevamente alrededor del crecimiento económico y el flujo de capitales. Consecuentemente, ya no es aceptable discutir ni las metas de inversión ni las de exportación, y solo se podrá debatir sobre cómo se usarán los excedentes captados por el Estado.

Un ejemplo muy claro de esta postura lo ofrece el nuevo presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien más allá de su imagen radical, acaba de sostener que “necesitamos inversión de afuera”, y no debe haber polémicas sobre esto ya que ese capital es indispensable. La discusión que se tolera debe ser sobre cómo usará el Estado los beneficios que la inversión genere; dice Mujica: “después, con los logros de la inversión, con los impuestos que deja y los márgenes de ganancia, podemos discutir si lo estamos gastando mal o bien, eso sí”.⁹

Se consolida, poco a poco, un estilo de desarrollo donde la izquierda criolla rompe con varios componentes de su propia historia, y paulatinamente muchos aspectos clave del desarrollo dejan de ser discutidos. Por cierto que mantiene sus críticas a las reformas de mercado y contra los anteriores gobiernos de inspiración neoliberal, y que el Estado

capte una mucho mayor proporción de la renta originada en los recursos naturales, pero un análisis más detenido y riguroso muestra que es muy poco lo que se discute sobre estas estrategias, y menos todavía sobre la posibilidad de ir más allá de estas formas de capitalismo socialmente compensadas.

En efecto, se ha desembocado en un “capitalismo benévolo”: se aceptan las condiciones básicas del capitalismo, pero se entiende que pueden existir reformas y ajustes que podrían reducir o amortiguar algunos de sus efectos negativos más claros, tales como la pobreza y la desigualdad (un punto que se analiza con más detalle en Gudynas, 2010). Incluso frente a la actual crisis económica global, esta corriente considera que se debe acentuar y acelerar el extractivismo, para que sus exportaciones compensen los problemas financieros del Estado.

Esta situación está comenzando a crujir en varios sitios. Esos emprendimientos extractivos mantienen o agravan los impactos sociales, y por esa razón, más tarde o más temprano, aparecen o se reactivan diferentes conflictos sociales. Esas reacciones son distintas entre los diferentes países, y al menos algunas tendencias se pueden señalar.

Posiblemente los dos casos donde el debate esté más restringido sean Uruguay y Venezuela. En el primero, por un lado existe una gran institucionalización partidaria y un amplio Estado benefactor (en escala latinoamericana), y por otro lado, la izquierda local no disimula: no le interesa el tema ambiental y lo inter-

9 El Observador, Montevideo, 12 febrero 2010.

preta como una oposición con la producción¹⁰. En Venezuela, las organizaciones ambientalistas están debilitadas, y la vorágine política del país arroja estas cuestiones en un segundo plano, donde persiste el fuerte peso cultural de la riqueza encerrada en el petróleo.

En Bolivia está recomenzando poco a poco el debate ambiental, a partir de algunas advertencias y protestas que vienen del medio rural. Pero sigue enfrentando muchas restricciones, dada la hegemonía política del MAS (Movimiento al Socialismo) y sus aliados, y la facilidad con la cual se tilda a muchas de esas expresiones como antirevolucionarias.

En Argentina, Brasil, Chile y Paraguay el tema alcanza una mayor discusión, aunque en cada caso por distintos motivos y diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en Argentina se mantiene, con algunos picos, protestas ante la expansión minera, y se ha generado una mayor conciencia sobre los problemas debido a los monocultivos extensivos de soja. En Brasil existen temas o áreas de conflicto, como pueden ser la construcción de represas en ríos amazónicos, la deforestación, la expansión de cultivos en el Cerrado, o las mineradoras en el nordeste. El tema forestal y minero se expresa en Chile, y bajo otra forma, en Paraguay, con una más clara asociación a demandas sobre pobreza y derechos humanos.

Finalmente, es posible que las polémicas más intensas y avanzadas estén teniendo lugar en Ecuador, cubriendo un amplio espectro de cuestiones que van desde la protección de la biodiversidad, a propuestas innovadoras como la de una moratoria petrolera en la Amazonia.

Izquierda y ecología

Las actuales contradicciones entre los estilos de desarrollos progresistas y la temática ambiental, no pueden explicarse apenas por una ausencia de un debate ecológico en el pensamiento de izquierda. Por lo tanto es necesario repasar algunos elementos resultantes del debate ambientalista.

La problemática ambiental tiene una larga historia y ganó creciente relevancia, por lo menos desde la década de 1960. Rápidamente se convirtió en un asunto político, y una parte de la izquierda se sintió identificada con ella. Pero en varios casos aprovechó el discurso verde como una fuente de nuevas críticas al capitalismo, antes que en elaborar alternativas de desarrollo. Por ejemplo, en un influyente texto de 1972, sobre socialismo y ecología, editado por la Fundación Bertrand Russell para la Paz, Ken Coates, sostenía que el socialismo tradicional tiene dos respuestas a la problemática ambiental: una crítica a la economía de mercado y su advertencia sobre el despojo capitalista de la pro-

10 El Frente Amplio de Uruguay es posiblemente el primer partido de izquierda que en el siglo XXI, en su programa electoral para las elecciones de 2009 no presentó una sección ambiental. Mientras otros partidos en otros países exhiben ambiciosas promesas electorales que después dejan de cumplir, en el caso uruguayo ni siquiera se disimula. El Frente Amplio en los últimos años ha derivado a posiciones de apoyo a los transgénicos, la intensificación agrícola, el uso de la energía nuclear y la transferencia a privados del monitoreo ambiental.

ductividad del suelo y el trabajador (Coates, 1976).

El esfuerzo dedicado a cuestionar al capitalismo no siempre dejó tiempo para comprender que la incorporación de aspectos ambientales también exigía un cambio dentro de la propia izquierda. Allí donde se inició esa necesaria renovación, se desembocó en formulaciones donde la izquierda verde se presentaba como “muy lejos a la izquierda de la izquierda” (tal como sostenía René Dumont, 1980). Esa línea de reflexión cuestionaba al capitalismo pero también a los regímenes políticos bajo el comunismo soviético, China e incluso Cuba. También se reconocía que un socialismo verde pasa no solo por cambios políticos y económicos, sino también por una transformación cultural, donde debemos “ser más” en lugar de “tener más” (para volver a usar palabras de Dumont).

Sin embargo, no todos esos aspectos fueron retomados en América Latina. Por el contrario, parte del debate latinoamericano estuvo marcado por el debate donde se enfrentó el concepto de límites ecológicos al crecimiento, presentado en 1972 en un reporte encargado por el Club de Roma (Meadows et al., 1972). En aquel tiempo se entendió que postular esos límites era un nuevo maltusianismo que en la práctica terminaría con restricciones sobre las opciones de desarrollo en el sur. El ataque más organizado

provino de un grupo de intelectuales de izquierda agrupados en la Fundación Bariloche, que bajo la coordinación de Amílcar Herrera (1975) elaboraron un estudio alternativo denominado “Modelo Mundial Latinoamericano”.

En esa reacción ya se encuentran muchas ideas que reaparecerán una y otra vez años después. Si bien contiene elementos compartibles, como cuestionar la imitación del desarrollo seguido por los países industrializados y rechazar el consumismo, de todos modos ese modelo está repleto del optimismo desarrollista convencional, defiende el uso de la energía nuclear y hasta una expansión agrícola que es ciega a sus efectos en las áreas naturales. Una evaluación general del reporte indica que sus componentes ecológicos eran muy débiles.¹¹

Pero hoy sabemos que muchas de las advertencias del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento son ciertas (sin dejar de reconocer modificaciones y correcciones en algunos aspectos). Estamos enfrentados a recursos naturales que son finitos y capacidades ecosistémicas también acotadas, tal como lo demuestran problemas contemporáneos como el cambio climático o el inminente declinar del petróleo.

Desde aquellos años, la creciente evidencia de estos problemas ha nutrido muchas corrientes políticas, y entre ellas el conjunto de partidos verdes (de escasa

11 El Modelo Mundial Latinoamericano rechazaba las posturas de los estudios predictivos elaborados en los países industrializados, y postulaba un abordaje normativo que partía de “un cambio hacia una sociedad básicamente socialista, basada en la igualdad y la plena participación de todos los seres humanos en las decisiones sociales. El consumo material y el crecimiento económico se regulan de manera que permitan lograr una sociedad intrínsecamente compatible con el medio ambiente” (Herrera, 1975).

penetración en América del Sur), y los diferentes grupos políticos de izquierda¹². Un repaso de esas etapas escapa al presente artículo, aunque es necesario subrayar los aportes más recientes e importantes.

Entre las manifestaciones recientes se debe recordar a la llamada "Tercera Vía". Esta postura tuvo amplia difusión en Europa, especialmente en gobiernos como el de Tony Blair, liderado por el Partido Laborista en Inglaterra, y de Gerhard Schroeder, del Partido Social Demócrata Alemán (donde actuaron coaligados con el partido Los Verdes). Sus aportes incidieron en los debates políticos de la izquierda sudamericana hacia fines de la década de 1990 (especialmente en los países del Cono Sur), aunque también despertaron muchas críticas locales.

El punto interesante para el presente análisis es que la Tercera Vía incorporó varios temas ambientales, y más allá de sus aciertos o equivocaciones, lo cierto es que su reflexión ecológica fue en algunos casos bastante detallada. Por un lado, se recogían algunos de los reclamos de los Partidos Verdes europeos, y por otro, se defendía una modernización en varios frentes, entre los que se encontraban las cuestiones ambientales. Esta corriente abordó asuntos como los transgénicos, la calidad de los alimentos, los controles ambientales, e incluso proponía introducir una dimensión ambiental en cuestiones de alta complejidad,

como el manejo del riesgo (véase por ejemplo a Giddens, 1999). Sin embargo, esa discusión no se reflejó en los debates sudamericanos, ni siquiera en los regímenes socialdemócratas más cercanos (Brasil, Chile y Uruguay). Las razones son variadas, y entre ellas se encuentran desacuerdos con otros componentes de la Tercera Vía, tales como su optimismo con la globalización y su conservadurismo filosófico.

Ambiente y socialismo del siglo XXI

Un cambio más radical y con un claro anclaje sudamericano, está representado por las reflexiones acerca del llamado "socialismo del siglo XXI". Ese rótulo es usado por varios analistas y unos cuantos políticos, y se ha transformado en algo bastante amplio, por momentos impreciso, aunque cada vez con más frecuencia se admite que es un proceso en construcción. Para el presente análisis es necesario examinar si esta novedosa corriente asume los problemas ambientales de América del Sur.

Apelando a las formulaciones de sus más conocidos promotores, es pertinente comenzar por Atilio Borón que ofrece un buen ejemplo de las posturas en juego, y es un conocido académico y militante. Borón (2008) considera que es indispensable una transición al socialismo, ya que nos encontraríamos en una "encrucijada civilizatoria", y aunque se alude

12 Sobre la izquierda, entendida en un amplio sentido, y los temas ambientales, se pueden revisar los aportes de Pepper, 1993; Bryant y Bailey, 1997; Dobson, 1997; Lowy, 2005; Valencia Sáiz, 2006; otras referencias se presentan más adelante. En el caso específico de Ecuador ha existido una temprana reflexión; los "Foros en Ecología Política" organizados por el CEP, es un claro ejemplo de ello. También se debe advertir que no todos los partidos verdes se identifican necesariamente con la izquierda, y algunos son conservadores.

al futuro de la humanidad en la tierra, no elabora ningún componente ambiental. Seguramente ese autor no niega la crisis ambiental, pero el punto relevante es que ese ingrediente no aparece con destaque.

Borón plantea en primer lugar una salida del neoliberalismo, que incluye abandonar las políticas del Consenso de Washington, defender una postura anti-imperialista clásica, reivindicar la toma del poder, y rescatar las respuestas frente a la globalización. En segundo lugar, enumera las iniciativas que deberían tomar los gobiernos, tales como la reconstrucción del Estado, anulación de la deuda externa, combatir la pobreza, inversiones públicas, reforma agraria, entre otros. Borón dice que una nueva estrategia de desarrollo debe estar centrada en suprimir los privilegios del capital, lo que significa “comenzar a construir el socialismo”.

En ninguna de esas dos listas aparece la problemática ambiental como tal, ni tampoco está incluida en los otros componentes. En especial es notoria su ausencia en el llamado a una nueva estrategia de desarrollo, en la cual más allá de controlar el capital, no se ofrecen otros detalles. No se exploran los contenidos y fines de otro desarrollo y su relación con el entorno.

Borón (2008) también brinda algunas “notas para la discusión” y entre ellas aparece una sección dedicada a los valores. En el debate ambiental de izquierda la cuestión de los valores es clave tal como se verá más abajo, por lo tanto allí podría aparecer la temática ambiental. Sin embargo, Borón vuelve a quedarse en los primeros pasos del ca-

mino alternativo, y a su juicio las cuestiones de valores se centran en la crítica a la sociedad burguesa. Más allá de la pertinencia o no de esos cuestionamientos, su contenido en realidad se aleja de un debate ético, y expresa posturas políticas. De esa manera, quedan muchos vacíos sobre cuáles serían los cambios éticos y morales en el socialismo del siglo XXI.

Otra vertiente es ofrecida por el alemán Heinz Dieterich (2008), que se ha vuelto muy conocida debido a su asociación con el presidente Hugo Chávez. Esta propuesta es más compleja y en algunos casos más detallada, abarcando elementos como un nuevo desarrollo, una economía que es planificada y basada en la equivalencia de los valores, un papel destacado para los movimientos sociales, democracia participativa, y un internacionalismo que descansa en bloques regionales de poder. La cuestión ambiental no es analizada como un ingrediente clave, aunque en varios temas había oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, en la discusión sobre la economía que ofrece Dieterich, su crítica a la valoración mercantil permitiría incorporar distintos aportes de la economía ecológica. Pero el autor sigue un camino casi inverso, en tanto defiende una “base operativa unitaria de la economía” a partir de la comensurabilidad entre precios, tiempo y materia.

Otro influyente analista, Juan Carlos Monedero (2008), si bien no detalla las implicancias de la temática ambiental, por lo menos la menciona. Mientras que el socialismo clásico apuntaba a la suficiencia y el productivismo, los “socialismos” del siglo XXI (una categoría plural

según este autor), se deberían enfocar en la sustentabilidad y el ecologismo, aunque no define esos componentes, ni estudia sus implicancias.

Una postura más moderada, pero más detallada, es presentada por el chileno Tomás Moulian, en su “quinta vía” al socialismo del siglo XXI. Se comienza por reconocer las fallas y fracasos de la izquierda socialdemócrata, para postular una estrategia de cambio que es distinta tanto de la revolución como de la reforma, y que Moulian denomina “transformación”. Ese camino es democrático, evita la destrucción del Estado anterior, y es un proceso gradual y de largo plazo, dotado de un sesgo libertario (Moulian, 2000). Bajo esta visión, el socialismo sería en primer lugar la “socialización del poder político” bajo una democracia participativa, una nueva economía y un cambio cultural hacia el ser y la comunidad. Pero en este caso tampoco se ofrece un análisis detallado de la cuestión ambiental. Parecería que en esta propuesta de corte comunitario y cultural, si bien hay una mayor profundización en algunas dimensiones del desarrollo (como la económica), no se analiza ni su base ecológica ni tampoco la diversidad cultural en las relaciones entre sociedad y naturaleza.

En cuanto a los presidentes, las referencias al socialismo del siglo XXI aparecen por ejemplo en Correa, Morales y Chávez. Pero en casi todos los casos, esas expresiones están atadas a distintas coyunturas políticas, por lo que es más apropiado examinar el desempeño de sus administraciones (tal como se hace en otras secciones del presente artículo).

Puede concluirse entonces que la vertiente del socialismo del siglo XXI, al

menos por ahora, no incluye la temática ambiental entre sus temas sustantivos, o apenas lo menciona. No es una cuestión que esté en su horizonte de temas relevantes. Es más, más allá de las críticas al capitalismo, también surgen muchas dudas sobre cómo construyen una alternativa de desarrollo post-capitalista.

También es llamativo que en esas elaboraciones sudamericanas del socialismo del siglo XXI no aprovecharan la intensa reflexión sobre marxismo y ecología (por ejemplo, sobre una “segunda contradicción” del capitalismo debida a la crisis ambiental, por O’Connor, 1998, o la relectura ecológica de Marx por Foster, 2004). La influencia de esos análisis propios del hemisferio norte sobre los debates sudamericanos han sido muy limitadas, tanto en promover los temas ambientales, como en las cuestiones políticas clásicas.

Uno de los pocos casos en adentrarse en ese terreno es Michael Löwy, sociólogo brasileño radicado desde hace mucho tiempo en París. Löwy publicó en el 2005 un contundente ensayo sobre ecología y socialismo, donde sostiene que se debe revisar críticamente la concepción marxista de fuerzas productivas y romper totalmente con la ideología del progreso. Se denuncia el capitalismo como incompatible con la protección ambiental, y se lanza un programa de ecosocialismo con varios componentes éticos.

Desde otra perspectiva, no puede dejar de mencionarse a los aportes del colombiano Orlando Fals Borda (2007), quien sostiene que ese socialismo del siglo XXI debe ser denominado como “raizal” y “ecológico”, en tanto debe “tomar en cuenta las raíces histórico-cul-

turales y de ambiente natural de nuestros pueblos de base". A su juicio, el socialismo de América Latina es diferente del europeo, y en tanto es "tropical" la incorporación de los pueblos originarios (que en su concepto incluye a indígenas, negros, campesinos, colonos, etc.), brinda un sentido más entendible y defendible a esa propuesta. Sin embargo Fals Borda no elabora con más detalle esa dimensión, y la agrupación política donde militaba (Polo Democrático Alternativo), tampoco puede calificarse como "roja y verde".

Más recientemente, en Bolivia se está desarrollando un complejo y sofisticado cuerpo de reflexiones y análisis a partir del nuevo protagonismo político de movimientos sociales campesinos e indígenas. Si bien muchas veces se invoca la cuestión ambiental en el diseño de la "plurinacionalidad" boliviana, las elaboraciones específicas todavía son pocas. Un buen ejemplo son los recientes textos de Luis Tapia (por ejemplo Tapia, 2009), donde el acento está en cuestiones políticas. Pero de todos modos asoma la cuestión ambiental, por ejemplo, al abordar las relaciones entre el tiempo político y social y los ciclos de la naturaleza. Postula una "legislación sensata" que permita "que los procesos de transformación de la naturaleza no destruyan el medio ambiente" pero que tampoco "descomponga las condiciones de vida y sociabilidad". La intuición es clara, pero el tema está apenas elaborado. En

una evaluación esquemática, y a riesgo de ser injusta, esa corriente entiende que la temática ambiental es importante, pero por ahora no ha logrado generar una reflexión ecológica sustantiva, depende mucho de los ejemplos antropológicos, y faltan las conexiones entre ecología y política.

Esta breve revisión deja en evidencia que entre algunas de las más importantes líneas de reflexión política de la izquierda sudamericana, la presencia de la dimensión ambiental es marginal.¹³ Incluso el intento de renovar el socialismo hacia el siglo XXI, al menos por ahora, no ha logrado incorporar la temática ambiental de forma sustantiva.

El regreso a la oposición entre economía y ecología

A pesar de las dificultades para lidiar con el tema ambiental, de todas maneras las cuestiones sobre el manejo de los recursos naturales, aparecen una y otra vez en el debate. Como no se ha desarrollado un debate más profundo, el progresismo tiende a enfocarse en un plano más superficial, entendiendo los temas ambientales como una inevitable oposición entre economía y ecología, como trabas al desarrollo y como obstáculos a sus políticas sociales. Esta supuesta oposición implica retroceder unos treinta años en las discusiones en ecología política. Ese era el tema propio de la década de 1970.

13 Asimismo, también parece observarse (¿una vez más?) una falta de diálogo dentro de las corrientes de izquierda. Por ejemplo, las elaboraciones teóricas del socialismo del siglo XXI parecería que discurren en compartimientos estancos sin dialogar entre ellas; Borón y Dieterich no se citan mutuamente y a su vez la consideración detallada de otros autores sudamericanos también es limitada.

En efecto, en aquel tiempo el resultado de la publicación de los “Límites al crecimiento” fue dejar en claro que la idea de crecimiento económico continuado era imposible por los límites ambientales (Meadows et al., 1972). Por lo tanto, quedó planteada una oposición entre el desarrollo económico como crecimiento, y las capacidades de sustentación ambiental del planeta. Ese debate duró más de diez años, hasta que a fines de la década de 1980 fue reformulado bajo un intento de disolver esa oposición, defendiendo que la conservación del ambiente se convertía en una condición para el desarrollo. En otras palabras: no hay economías posibles sin una base ecológica.

Esta concepción no ha estado exenta de problemas, debido a que vastos sectores que entendían el desarrollo apenas como crecimiento económico, presentaron a la conservación como necesaria para asegurar y mantener el crecimiento económico. El mejor ejemplo de este cambio es la formulación clásica de desarrollo sostenible ofrecida por la Comisión Mundial en Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, en “Nuestro Futuro Común” (CMMAD, 1987). La oposición ecología versus conservación de los años setenta se disolvió bajo una ecología para el “crecimiento económico”.

El debate alrededor de estas cuestiones avanzó a tropezones en América Latina a lo largo de la década de 1990 e inicios de la del 2000, ya que las reformas de mercado minimizaron la temática ambiental y forjaron una postura reduccionista del desarrollo. Bajo ese aliento se defendieron las soluciones de

tipo empresarial y mercantil para la temática ambiental, tales como los mercados de bienes o servicios ambientales, algunos de los cuales se ejemplificaron arriba. La transformación de la Naturaleza en una mercancía se acentuó todavía más y con ello el conflicto ecología versus conservación parecía desvanecerse, ya que se podía incluir el ambiente dentro de la economía convencional de mercado. No se niegan muchos problemas ambientales, sino que se les busca una solución convirtiéndolos en negocios. Actualmente se insiste en ese mensaje, por ejemplo desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): “ser verde para crecer”, apelando a mecanismos de mercado más ajustados y una “economía de los ecosistemas” (UNEP, 2010).

Esas posturas merecen muchas observaciones y críticas. De hecho, hay una discusión en marcha sobre la real eficacia de la mercantilización de la Naturaleza, el papel de las políticas públicas, las presiones del consumo, etc. Más allá de esos contenidos, resulta impactante que la crítica de izquierda al reduccionismo de mercado se detuviera justo antes de abordar la temática ambiental, y con ello dejó aceptada en los hechos la mercantilización de la Naturaleza. Se critica el capitalismo global, pero se busca participar en el mercado global, por ejemplo vendiendo bonos de captación de carbono; se anuncian las alternativas, pero se fortalece una economía de enclaves de extracción de recursos naturales, y así sucesivamente.

Algunas viejas advertencias, propias de la década de 1970, mantienen una

actual validez. Por ejemplo, el alemán Hans Magnus Enzensberger publicó en 1973 un texto clave sobre la ecología política de aquellos tiempos. Entre varias advertencias, cuestionaba el optimismo tecnológico de la tradición marxista, y si bien criticaba duramente el capitalismo, no dudaba en advertir que en los países soviéticos, que ni eran capitalistas ni contaban con propiedad privada, de todos modos se repetía la debacle ambiental (Enzensberger, 1976, edición original 1973). Esta no es una cuestión menor, ya que en los regímenes de aquel socialismo, los problemas ambientales se ocultaban, no se manejaban adecuadamente, su discusión política era raquítica y, por su talante autoritario, se impedían los reclamos ciudadanos. Cualquier forma de nuevo socialismo sudamericano no puede ignorar esa evidencia histórica.

Otro de los argumentos de Enzensberger puede ser ajustado al día de hoy: los cuestionamientos que se hacen desde la izquierda, e incluso desde los gobiernos progresistas, contra los intereses económicos globales, las transnacionales que se apoderan de nuestros recursos o la publicidad que alimenta el consumo, sirven para desenmascarar esos papeles, pero ello no genera por sí solo mejoras ambientales, no solucionan la contaminación, no detienen la deforestación ni desalienta el consumismo.

Muchos discursos críticos en realidad pretendían, como dice Enzensberger, “comerciar con el poder subversivo y crítico del marxismo”, para finalmente convertirlo en “una serie de frases este-reotipadas, que, en su abstracción, son tan incontrastables como inútiles”. Esa

sensación se repite, hoy por hoy, frente a algunos gobernantes e intelectuales progresistas, donde se toman frases, rótulos y hasta estéticas socialistas, y se lanzan duras críticas contra el capitalismo actual (en muchas ocasiones con unas buenas cuotas de razón), pero sin generar una renovación conceptual ni una gestión estatal más efectiva. Se critica la economía global, pero se vive intensamente con ella, y se critica al capitalismo pero en los hechos se refuerzan las economías extractivas. Y todo esto sin encarar seriamente una mejor gestión ambiental para lidiar con sus impactos sociales y ambientales locales. Por lo tanto, una renovación de la izquierda por cierto que no debería abandonar esas críticas, pero solamente con ello no basta, y es necesario que simultáneamente se renueve con la incorporación del tema ambiental, sin excluir o menospreciar a aquellos que lo postulan.

La protesta social y las denuncias de organizaciones ambientalistas dejan en evidencia estas limitaciones del actual progresismo. Pero a la vez desnudan que uno de los pilares clásicos de la izquierda, la justicia social, no se cumple cabalmente. Los impactos sociales y ambientales expresan también injusticias en esos planos y este es un cuestionamiento particularmente doloroso para quienes gobiernan en la actualidad. Es muy posible que las fuertes reacciones presidenciales en contra de los ambientalistas, tal como se observa con Rafael Correa, Lula da Silva o Evo Morales, se deban a esto.

Más allá del debate conceptual, está claro que el actual énfasis extractivista genera impactos sociales y ambientales que alimentan la crítica, protesta o desi-

lusión frente a la izquierda gobernante. Hay un creciente malestar con esta situación. Tanto desde los espacios de reflexión, como en la militancia social, o en la cotidianidad de las comunidades locales, una y otra vez se escucha decir: si estos gobiernos anuncian la renovación, apelan a la justicia y la solidaridad, ¿por qué siguen destruyendo la Naturaleza?

Ecología y renovación política

En el siglo XXI cualquier alternativa de izquierda, sea socialista o no, no puede obviar los temas ambientales. Su incorporación no es apenas un ingrediente más en un largo repertorio de críticas al capitalismo, sino que debe ser uno de los temas centrales en cualquier pensamiento renovador. Es más, los diversos intentos actuales de caracterizar el socialismo del nuevo milenio, serán todos incompletos si carecen de esa dimensión y, por lo tanto, una tarea urgente es que sus defensores pongan manos a la obra para incorporarlos.

Además, esa incorporación no es solamente un componente más que se agregará a una larga lista de atributos. Por el contrario, al sumar esos aspectos se hace necesario revisar varios atributos del ideario de izquierda, incluso algunas de sus ideas básicas. Aún aceptando una socialdemocracia moderada, no puede defenderse la construcción de un Estado de Bienestar a partir de la destrucción de la Naturaleza.

Es necesario comenzar por un cambio de actitud y abandonar el negacionismo ecológico. Los problemas ambientales, la contaminación, la deforestación, la basura urbana, y tantos

otros, son reales, graves, y afectan a mucha gente. Ya no es posible tolerar las posturas de izquierda que repiten los discursos de una década atrás, minimizando u ocultando ese deterioro ambiental.

Seguidamente se debe reconocer la existencia de límites ecológicos. No es posible continuar con la defensa de una producción expansiva y crecimiento económico perpetuo, ya que no hay recursos para ello y el planeta no soportaría sus efectos. Por lo tanto, la idea de la abundancia y el crecimiento ilimitado de las fuerzas productivas, propia del marxismo clásico, debe ser reemplazada por la de la escasez. Esto no quiere decir que no existan serios problemas de distribución y acceso, pero esa situación no puede llevarnos a ignorar la real presencia de límites ecológicos. La defensa de un cambio político orientado a una sociedad de la abundancia ya no es posible (sobre las implicancias de este punto para el socialismo véase, por ejemplo, Ovejero Lucas, 2005). Los recursos son finitos, ya sea la tierra agrícola disponible como el stock de hidrocarburos, y así sucesivamente. Pero también son limitadas las capacidades de los ecosistemas, como cursos de agua o bosques, en lidiar con los impactos ambientales. En algunos casos se pueden empujar esos límites, por ejemplo apelando a la fertilización y el riego, pero esto a su vez genera otros impactos ambientales. Es así que de una manera u otra la escasez vuelve a aparecer.

En América del Sur, el progresismo viene esquivando la noción de escasez en tanto los acervos de recursos naturales del continente son todavía muy amplios. Pero las señales de limitación ya

están comenzando a aparecer en varios frentes, tales como la disponibilidad de buenos suelos agrícolas, las reservas realmente disponibles de hidrocarburos, o las capacidades de amortiguación de contaminantes en suelos y aguas (por ejemplo, nitratos en aguas subterráneas). Por otro lado, muchos de los recursos que se pueden extraer están en lugares más remotos, y entonces el acceso a ellos genera otra sucesión de impactos ambientales (como la apertura de caminos hacia los pozos de petróleo en la Amazonia). Estos límites ya no pueden ser ignorados y cualquier programa de renovación de la izquierda debe incorporarlos.

Una renovación verde de la izquierda también requiere nuevas reflexiones sobre las nociones de igualdad y justicia. Recordemos, con Bobbio (2001), que la igualdad es una de las preocupaciones que define a la izquierda. Compartiendo el rechazo moral a la desigualdad, toda la tradición de izquierda siempre puso en primer plano a los más pobres, los asalariados, los marginales, y son justamente ellos los que casi siempre tienen que lidiar con las peores condiciones de deterioro ambiental, viviendo en sitios contaminados, con malas condiciones de salubridad laboral, o bajo altos riesgos ambientales. Por lo tanto, cualquier programa de izquierda en el siglo XXI debe incorporar un energético plan de acción en justicia ambiental (un área casi ausente en la mayor parte de los gobiernos progresistas).

La mirada ecológica sobre la justicia también tiene presente las limitaciones impuestas por la escasez, de donde el ideal socialista de la igualdad requiere ser reexaminado. En efecto, si la prose-

cución de la igualdad apunta a tener los mismos niveles de alto consumo de materia y energía de los países industrializados, es evidente que no hay recursos disponibles para asegurar ese fin. Un abordaje meramente redistributivo de la justicia es insuficiente. “Si no hay de todo ni para todos, si no estamos en una sociedad de la abundancia, aparecen los problemas de la distribución: ¿qué se debe distribuir?, ¿con qué criterios?, ¿a quién?” – alerta Ovejero Lucas (2005).

Asimismo, existe en América Latina una gran diversidad cultural que se expresa en distintas valoraciones sobre la calidad de vida, y sobre las relaciones de los humanos con la Naturaleza. En este caso, se enfrenta el desafío de la multiculturalidad también en un plano ambiental de manera de atender a las diversas tradiciones culturales en el continente.

Resulta claro entonces, que un progresismo contemporáneo no se puede hacer ni contra la Naturaleza, ni por añadidura, contra las diferentes expresiones culturales que reclaman otra relación con el entorno. Por lo tanto, todo lleva a una nueva reflexión sobre la justicia, y sobre los procesos políticos para enfrentar esas limitaciones ecológicas. Esta discusión política debe profundizar sus aspectos democráticos para navegar en esta pluralidad de valoraciones y percepciones. Asimismo, la izquierda contemporánea debe incorporar a la justicia ambiental, y ésta debe tener el mismo rango que la justicia social. El chantaje donde, por ejemplo, se defiende el extractivismo como necesario para aliviar la pobreza, no tiene sentido, ya que la justicia social no puede darse sin una justicia ambiental.

Ética, biocentrismo y desarrollo

Otro cambio sustancial debe tener lugar en el campo de la ética. Si bien muchas discusiones sobre la izquierda abordan el problema de los valores, la mayor parte de ellas lo hace en un plano instrumental y sobre todo, enfocando cuestiones morales. Existe una cierta coincidencia en criticar el reduccionismo de la valoración económica y en cuestionar el mercado. En el caso de algunas reflexiones dentro del ecosocialismo, esto llevó a abandonar el actual énfasis en los valores de cambio para privilegiar los valores de uso, vinculándolos directamente a la satisfacción de las necesidades humanas básicas (por ejemplo, Riechmann, 2006).

Pero el problema es que, aún bajo el valor de uso, se insiste en concebir a la Naturaleza como una canasta de recursos que son valorados en función de la utilidad humana. Persiste entonces un abordaje claramente antropocéntrico, y esa postura es la que sirve como columna vertebral para las diferentes formas de la ideología del progreso, incluida la representada por el progresismo contemporáneo. Se tolera la destrucción ambiental ya que ésta es concebida como una mediación para los fines humanos. Sigue presente el mandato de conquistar y dominar la Naturaleza que hunde sus raíces en la modernidad europea, y que se ha reproducido de las más variadas formas desde la época de la colonia. Un ejemplo de su vitalidad actual, son las declaraciones del presidente Rafael Correa ante los cortes de energía eléctrica resultantes de la sequía que sufrió Ecuador a fines de 2009. Frente a lo que consideraba una

adversidad ambiental, en uno de sus discursos proclamó: “Si la naturaleza con esta sequía se opone a la revolución ciudadana, lucharemos y juntos la venceremos, tengan la seguridad” (noviembre 2009).

En el terreno ético, entendido como el debate sobre las formas de valoración, se desenvuelve otro complejo desafío para la izquierda. Será necesario abandonar el antropocentrismo para ir más allá de los valores de uso y de cambio, y aceptar los valores intrínsecos de la Naturaleza. Esta es una transición al biocentrismo. No se niegan las valoraciones de uso y de cambio, sino que se reconoce que además de ellas, existe un valor propio en el ambiente y en las demás formas de vida, independiente de la utilidad humana. Por lo tanto, la escala de valoración se diversifica, y es así que verdaderamente se rompe con la mercantilización de la Naturaleza.

Ese debate se está instalando. Uno de los mejores ejemplos es el reconocimiento de los derechos propios de la Naturaleza en la nueva Constitución de Ecuador. Allí se abre las puertas al biocentrismo, rompiéndose con la exclusividad antropocéntrica. Como resultado la Naturaleza debe ser defendida en sí misma, independientemente de las potenciales utilidades o beneficios para las personas. Esta Naturaleza, sujeto de derechos, permite apuntar a perspectivas de desarrollo alternas a la de la modernidad, bajo cambios más radicales. Ese camino hace que la justicia social sea ambiental, pero también es una justicia ecológica, en tanto se debe asegurar la preservación del entorno natural por sus valores propios (Gudynas, 2009a).

La nueva izquierda debe ser entonces menos “progresista”, como expresión de la ideología del progreso, y más biocéntrica. Ese camino comienza a recorrerse desde los borradores de desarrollo alternativo de tipo post-extractivista, ya que se alejan de un materialismo instrumentalizador, se vuelven a enfocar en la calidad de vida como buen vivir, y se alimenta una nueva sensibilidad para una justicia que es social y ambiental. Sin duda que esos ensayos generan enormes tensiones dentro de la izquierda actual, en tanto ponen en discusión muchas de sus bases conceptuales, y más allá de ellas, también cuestionan la tradición cultural de la modernidad. Pero ese debate y estos ensayos son indispensables para mantener el empuje renovador de la izquierda y su compromiso con la justicia. Se llega de esta manera a una situación donde, en el siglo XXI, si te llamas progresista, socialista, revolucionario o alternativo, debes dejar de destruir la Naturaleza y comenzar a protegerla. Hoy mismo, sin excusas, y sin pausa.

Bibliografía

- Acosta, A.
2009 *La maldición de la abundancia*. CEP, SwissAid, y AbyaYala, Quito.
- Bobbio, N.
2001 *Derecha e izquierda. ¿Existen aún la izquierda y la derecha?* Suma de Letras, Madrid.
- Boron, A.
2008 *Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?* Ediciones Luxemburg, Buenos Aires.
- Bryant, R.L. y S. Bailey.
1997 *Third World political ecology*. Routledge, Londres.
- CMMAD (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo)
1987 *Nuestro futuro común*. Alianza, Madrid.
- Coates, K.
1976 *Socialismo y medio ambiente*, pp 108-120, En: “Socialismo y medio ambiente”. G. Pili, Barcelona.
- de Oliveira, A.U.
2009 *O governo Lula assumiu a contra reforma agrária: a violência do agrobandidismo continua*. Comissão Pastoral da Terra, Secretaria Nacional, Goiânia.
- Dieterich Steffan, H.
2008 *El socialismo del siglo XXI*. México.
- Dobson, A.
1997 *Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo XXI*. Paidós, Barcelona.
- Dumont, R.
1980 *Ecología socialista. Sólo una ecología socialista puede permitirnos sobrevivir*. M. Roca. Barcelona.
- Enzensberger, H.M.
1976 *Para una crítica de la ecología política*. Anagrama, Barcelona.
- Fals Borda, O.
2007 *Hacia el socialismo raizal y otros escritos*. Ediciones CEPA y Desde Abajo, Bogotá.
- Foster, J.B.
2004 *La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza*. El Viejo Topo, Barcelona.
- García-Gaudilla, M.P.
2009 “Ecosocialismo del siglo XXI y modelo de desarrollo bolivariano: los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa en Venezuela”. *Revista Venezolana Economía y Ciencias Sociales* 15(1): 187-223.
- Giddens, A.
1999 *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Taurus, Madrid.
- Gudynas, E.
2009a *El mandato ecológico*. Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución. AbyaYala, Quito.
- Gudynas, E.
2009b “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, pp 187-225, En *Extractivismo, política y sociedad*. CAAP y CLAES, Quito.

- Gudynas, E.
 2010 "La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo". *Íconos*, Quito, 36: 53-67.
- Hayashi, S., C. Souza Jr., M. Sales y A. Veríssimo
 2010 "Transparência Florestal", Dezembro 2009 e Janeiro 2010. *Amazonia Legal*, Imazon.
- Herrera, A.O. (coord.)
 1975 *¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano*. IIED e IDRC, Buenos Aires, 2da edición, 2004.
- Löwy, M.
 2005 *Ecología e socialismo*. Cortez Editora, Sao Paulo.
- Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers y W.W. Behrens III
 1972 *Los límites del crecimiento*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Monedero, J.C.
 2008 "Los socialismos del siglo XXI: reinventar la teoría política a la luz de la práctica revolucionaria", pp 183-209, En: *Volver al futuro. La búsqueda de un socialismo latinoamericano* (G. Ayala Cruz, comp.). La Tierra, Quito.
- Morales, C.B. de y M.O. Ribera Arismendi (eds.)
 2008 *Informe del estado ambiental de Bolivia. 2007-2008*. LIDEMA, La Paz.
- Moulain, T.
 2000 *Socialismo del siglo XXI. La quinta vía*. Lom, Santiago de Chile.
- Ovejero Lucas, F.
 2005 *Proceso abierto. El socialismo después del socialismo*. Tusquets, Barcelona.
- Pepper, D.
 1993 *Eco-socialism. From deep ecology to social justice*. Routledge, Londres.
- Riechmann, Jorge
 2006 "La crítica socialista al capitalismo", pp 67-111, En: *La izquierda verde* (A. Valencia Sáiz, ed.). Icaria, Barcelona.
- Saint-Upéry, M.
 2008 *El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas*. Paidós, Barcelona.
- Svampa, M. y M.A. Antonelli (eds.)
 2009 *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Biblos, Buenos Aires.
- Tapia, L.
 2009 *Pensando la democracia geopolíticamente*. CLACSO, CIDES, Comuna y Muela del Diablo, La Paz.
- UNEP
 2010 *Annual report 2009. Seizing the green opportunity*. UNEP, Nairobi.
- Valencia Sáiz, A. (ed.)
 2006 *La izquierda verde*. Icaria, Barcelona.
- Villegas N., P.
 2008 *"¿Representa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al Estado boliviano? PetroPress*, La Paz, 18: 20-23.

